

VII CONGRESO NACIONAL DE COALICIÓN CANARIA

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

SOBRE LA INMIGRACIÓN EN CANARIAS

Los flujos migratorios son una expresión de la desigualdad mundial; el ser humano busca, en su forzada movilidad, una vida mejor en un país diferente. Desde la llegada de la primera patera a Fuerteventura, en 1994, Canarias es destino en la ruta marítima en el Atlántico de la población africana, ya sea magrebí o subsahariana. Destino o tránsito, pero suelo español y europeo. La Unión Europea (UE) no ha sido capaz de crear una política común regulatoria y de gestión de los flujos de trabajadores del exterior de sus fronteras. Asimismo, la política exterior española hacia África ha sido desde hace años errática, cuando no desastrosa.

En estos días de 2020, junto a la dura realidad de la lucha contra la Covid-19 y las severas consecuencias económicas para nuestro inmediato futuro, la ruta atlántica de la inmigración clandestina está abierta y las imágenes de llegadas continuas de embarcaciones a nuestras costas añaden preocupación a nuestra gente. Portavoces políticos y medios de comunicación han usado duras expresiones frente a la indiferencia y la pésima gestión del Gobierno del Estado, único competente en control de fronteras. La Comunidad Autónoma sólo lo es en el acogimiento y tutela de los menores extranjeros no acompañados.

Pese al constante incremento en la llegada de migrantes a nuestras costas frente al descenso en el territorio peninsular, y las constantes advertencias sobre el creciente flujo en la costa atlántica, la respuesta de los diferentes Ministerios ha llegado tarde y, en algunos casos, ni siquiera ha llegado a producirse.

Desconcierta la ausencia de una respuesta coordinada por parte del Gobierno o la inexistencia de un órgano que coordine las líneas de actuación del Ejecutivo en las islas para hacer frente a un drama que ha acabado con miles de vidas y que supone, en estos momentos, un grave problema que amenaza con colapsar los servicios públicos ante los efectos paralelos de la pandemia del coronavirus.

Mientras los migrantes duermen en unas condiciones inadmisibles en espacios improvisados al aire libre, como es el caso del muelle de Arguineguín, el Gobierno del Estado sigue sin habilitar instalaciones que reúnan las condiciones adecuadas en infraestructuras que son de

su titularidad y que se encuentran en desuso, entre ellas los cuarteles dependientes del Ministerio de Defensa.

La acogida temporal de los migrantes en hoteles y apartamentos no es la opción más adecuada y fomenta, además, el discurso xenófobo y racista de aquellos partidos que usan el fenómeno migratorio con fines políticos.

La tragedia ocurrida en la costa de Órzola días atrás nos recuerda que este drama tiene rostros, los de las personas que mueren todos los días intentando llegar a nuestras Islas.

Los hechos vienen a corroborar lo que hemos venido denunciando hace meses: que el Estado ha dejado solas a las instituciones canarias en la gestión de un repunte migratorio sin medios y sin recursos y que esta actitud no responde tan sólo a una evidente descoordinación y desinterés, sino que obedece a la estrategia de mirar para otro lado y convertir a Canarias en el destino final de quien huye del hambre y de la guerra para llegar a Europa.

Es el momento de tomar, definitivamente, medidas contundentes que permitan articular un sistema de actuación en las islas que nos permita, como ya hicimos en 2006, activar la cooperación y la estrategia diplomática en los puntos de origen, disponer de los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes para atender a estas personas con dignidad, activar las derivaciones e impulsar la lucha contra las mafias que arrojan a estas personas al mar y a un futuro incierto.

Por ello queremos reconocer y agradecer el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, personas voluntarias y cuerpos de seguridad y salvamento que llevan varios meses atendiendo a pie de muelle y en nuestras costas a los más de 19.000 inmigrantes llegados a Canarias durante este año.

Exigir con contundencia al Gobierno de España que actúe de una vez ante la situación migratoria que vive Canarias, demandándole el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por unanimidad en el Parlamento de Canarias y el Senado que fueron detallados en el informe de gestión de la Secretaría General aprobado ayer por este VII Congreso.

Asimismo el VII Congreso Nacional reprueba, sin paliativos, la descoordinación en el seno del Gobierno de España, que lleva meses desarrollando una política errática en el tratamiento de la inmigración irregular que afecta a Canarias así como sus propuestas de plan anunciado en estos días para la inmigración en Canarias.